

INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE ANTIOQUIA

LÍNEA BASE

ANTIOQUIA 
cómo vamos
LAB

Fundación corona

comfama

Comfenalco
Antioquia

GRUPO ARGOS
Fundación

uniban

FUNDACION GRUPO
bios.

Mineros
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
EAFIT
Vigilada Mineducación

UDB

Universidad
de Medellín
Ciencia y Libertad

UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

PRISA MEDIA

PROANTIOQUIA

COMITÉ DIRECTIVO

Maria Bibiana Botero Carrera

Presidenta ejecutiva Proantioquia

Diana Dajer

Gerente de Participación Ciudadana de Fundación Corona

Mauricio Pérez

Responsable de Regiones Comfama

Carolina Franco

Gerente Bienestar social e intelectual Comfenalco

Santiago Cardona

Vicepresidente Colombia Mineros

Carolina Jaramillo

Directora de Sostenibilidad Fundación Unibán

Alejandro Arbeláez

Vicerrector académico Universidad de Medellín

Juan Carlos de la Cruz Pérez

Director de Extensión Multicampus Universidad Pontificia Bolivariana

Manuel Acevedo Jaramillo

Director de Extensión Multicampus Universidad Pontificia Bolivariana

COMITÉ TÉCNICO

Laura Gallego Moscoso

Vicepresidenta ejecutiva Proantioquia

Manuela Giraldo

Coordinadora territorial Fundación Corona

Mónica Arango

Asesora Regiones Comfama

Liliana Galeano

Gerente de Empleo y Emprendimiento Comfenalco

Juana Pérez

Directora de Gestión Social del Territorio Mineros

Mauricio Perfetti

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín

Nicolás Molina

Docente Investigador Universidad Pontificia Bolivariana

Claudia Arenas

Directora de Extensión Rectoría Universidad CES

Juan Carlos Muñoz

Director Área Políticas y Desarrollo Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno Universidad EAFIT

COMITÉ DE COMUNICACIONES

Mauricio Mosquera

Director de comunicaciones y relaciones institucionales Proantioquia

Juan Carlos Higueta

Director del Servicio Informativo de Caracol Radio en Medellín Grupo Prisa

Diana Vélez

Responsable de Comunicaciones y Relacionamento Comfama

Liliana Proalini

Jefe de comunicaciones corporativas Comfenalco

Maria Camila Vélez

Directora de Desarrollo de Negocios y Mercadeo Uniban

Maria Clara Restrepo

Comunicadora Uniban

Katerine Luna

Analista de comunicaciones para la Unidad de Extensión Universidad Pontificia Bolivariana

UNIDAD COORDINADORA

Textos y edición:

Mónica Ospina Londoño, *directora*
 Natalia Garay Molina, *responsable de gestión técnica y del conocimiento*
 Carolina Aristizábal Saldarriaga, *analista*
 Ona Duarte Venklauskas, *analista*
 Alejandro Arenas Álzate, *analista*
 Yeison Londoño Quiceno, *analista*
 Sara Sofía Arcila Múnera, *analista*
 Daniel Palacio Tamayo, *responsable de comunicaciones*
 Luis Fernando Agudelo, *consultor Valor Público Eafit*
 Santiago Leyva Botero, *consultor Valor Público Eafit*

Diseño y diagramación:

Mariana Gómez Álvarez, *comunicadora audiovisual y gráfica*

ISBN 3028-3094



Seguridad y convivencia ciudadana

La seguridad y la convivencia ciudadana son pilares fundamentales para evaluar la calidad de vida en una sociedad. Un entorno seguro donde las personas puedan desenvolverse sin miedo promueve la confianza interpersonal (Spadaro et al., 2020), la libre movilidad (Fortin, 2016), la atracción de inversiones y la consolidación de un ambiente propicio para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible (Carrillo Flórez, 2007; Hip.p. et al., 2019; Kalmanovitz, 1997).

Así, la falta de garantías en materia de seguridad no solo afecta la vida cotidiana de las personas, sino que también pone en riesgo el desarrollo a largo plazo del departamento. En el caso de Antioquia, la institucionalidad se enfrenta a un desafío sumamente complejo en materia de seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales que se encuentran

presentes en el 98% de los municipios (Gobernación de Antioquia, 2021b). Estos grupos imponen modelos de gobernanza criminal que permea casi todas las esferas de la sociedad, mediante la imposición de reglas o normas que afectan dimensiones de la vida social, económica y política de las personas (Bonilla Calle, 2022).

En su afán por tomar el control territorial y las rentas ilícitas de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión (Bonilla Calle, 2022; Giraldo Ramírez & Muñoz Mora, 2012; Maldonado Sarmiento & Rozo Gutiérrez, 2014), estos grupos desencadenan confrontaciones armadas que tienen consecuencias devastadoras, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y otros hechos victimizantes que afectan principalmente a la pobla-

ción civil (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2023). Estas acciones violentas generan un clima de inseguridad y temor, que impactan negativamente en la calidad de vida de los habitantes y obstaculizan el desarrollo social y económico de Antioquia.

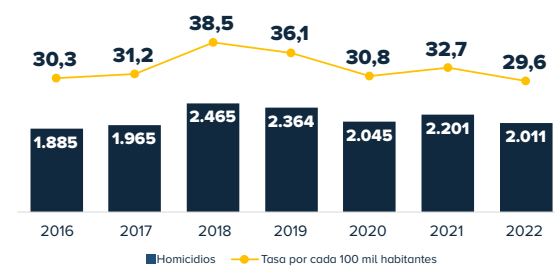
A esto se le suman factores como la desigualdad y la falta de oportunidades para la movilidad social (Ver Capítulo Pobreza), así como la ausencia de programas efectivos de prevención del delito (Gómez & Zapata, 2020) y la falta de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia (RCCV, 2021). Estas condiciones adversas contribuyen a la propagación de una cultura de la ilegalidad y del dinero fácil que ha hecho mella en Antioquia, profundizando la violencia y creando un ambiente propicio para la proliferación de actividades criminales (Duque, 2013; García Perilla & Devia Garzón, 2018; Mauricio García Villegas, 2010; Quintero Cordero & Molina Orjuela, 2013).

Partiendo del reconocimiento de este contexto, en este capítulo se describe la situación de seguridad y convivencia en Antioquia a través del seguimiento de delitos de alto impacto que atentan contra la vida, el patrimonio y la libertad de los habitantes del departamento, así como de aquellos hechos que reflejan manifestaciones de deterioro en la convivencia. Esto, con el propósito de contribuir a la comprensión de los desafíos que enfrenta el departamento y sus subregiones en términos de seguridad y convivencia.

Homicidios

La violencia homicida representa uno de los mayores desafíos en términos de seguridad y convivencia en Antioquia. El departamento ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de homicidios, siendo superado únicamente por Valle del Cauca (DANE, 2023d). Sin embargo, al tener en cuenta la densidad poblacional, Antioquia registra la decimoquinta tasa de homicidios más alta por cada 100 mil habitantes.

Gráfico 16. Antioquia: Número de homicidios y tasa por cada 100 mil habitantes, 2016 – 2022



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos del DANE – Estadísticas Vitales.

Aunque en Antioquia han disminuido los homicidios desde el pico alcanzado en 2018 (ver Gráfico 16), la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes del departamento sigue siendo superior a la meta establecida en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para Antioquia 2030, que propuso alcanzar una tasa de 16.4 homicidios por cada 100 mil habitantes (Gobernación de Antioquia, 2021f).

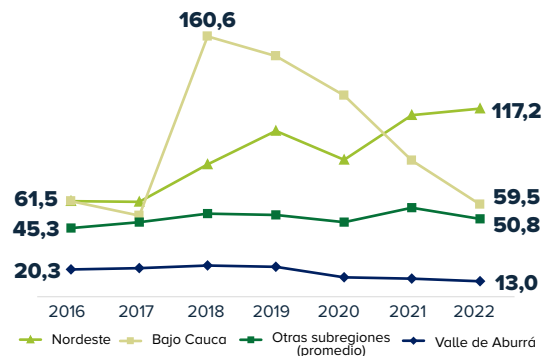
De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO (2023), el Valle de Aburrá es la subregión de Antioquia que concentra la mayor cantidad de homicidios en el pe-

riodo comprendido entre 2016 y 2022, el 34% de los homicidios del departamento ocurrieron en esta subregión. Le siguen las subregiones de Suroeste y Bajo Cauca, con 12% de los casos cada una.

Es importante considerar que la prevalencia de homicidios en Valle de Aburrá está explicada en gran medida por su alta densidad poblacional. Sin embargo, al analizar la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, se observa que el Valle de Aburrá tiene la tasa de homicidios más baja del departamento, y además muestra una tendencia decreciente (ver Gráfico 17). Además, nótese que Valle de Aburrá es la única subregión que alcanza la meta establecida para Antioquia a 2030.

Aunque en 2018 el Bajo Cauca experimentó un aumento abrupto en su tasa de homicidios, desde entonces ha disminuido hasta alcanzar niveles similares a los observados en años anteriores al incremento. Por otro lado, resulta preocupante el incremento que ha experimentado la tasa de homicidios del Nordeste desde 2017. En 2022, la tasa de homicidios de esta subregión alcanzó los 117 por cada 100 mil habitantes, casi el doble de lo que registró hace seis años (ver Gráfico 17). Sin embargo, cabe señalar que durante el primer semestre de 2023, el Nordeste presentó una reducción del 47% en los casos de homicidios en comparación con el mismo período de 2022 (Gobernación de Antioquia, 2023).

Gráfico 17. Subregiones: tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 2016 - 2022



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos del SIEDCO y del DANE.

Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2022, nueve de cada diez víctimas de homicidio en Antioquia fueron hombres, y en el 75% de los casos se utilizó un arma de fuego como medio para cometer el homicidio. Esta dinámica sugiere la posible implicación de grupos armados ilegales en estas muertes (SIEDCO, 2023). Para 2022, la tasa de homicidios entre los hombres se ubicó en 57,3 hombres asesinados por cada 100,000 hombres (DANE, 2023e).

Por otro lado, la tasa de homicidios entre las mujeres del departamento alcanzó su nivel más bajo desde que se tienen registros: 3,8 mujeres asesinadas por cada 100,000 mujeres en 2022 (DANE, 2023e). Esto es, 132 mujeres víctimas de homicidio en Antioquia en 2022. Aunque esta cifra ha tocado un mínimo histórico, no se puede ignorar la preocupante cantidad de mujeres que siguen siendo víctimas de asesinatos basados en género en el

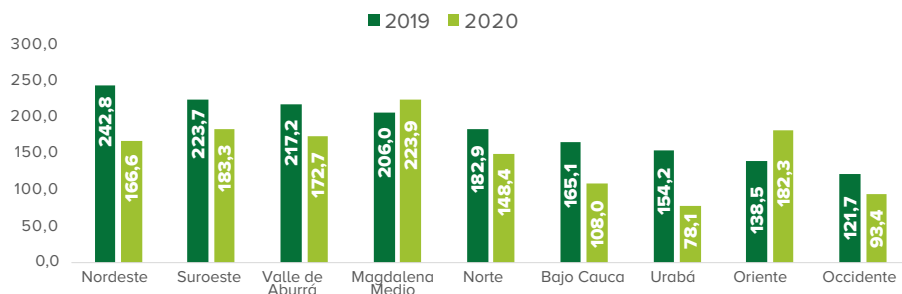
departamento. Según la Fundación Fe-
minicidios Colombia (2022), entre enero
y octubre de 2022, 19 mujeres fueron
víctimas de feminicidio en Antioquia. Sin
embargo, es importante tener en cuenta
que esta cifra podría ser mayor, ya que
la Fiscalía General de la Nación reporta
54 denuncias por presuntos casos de fe-
minicidio ocurridos en 2022 en Antioquia
(Fiscalía General de la Nación, 2023).

Es relevante señalar que, a la fecha (30
de junio de 2023), 17 de estos 54 casos
han recibido condena, mientras que los
demás se encuentran en diferentes eta-
pas del proceso judicial: 18 en etapa de
juicio, 17 en indagación, 1 en investigación
y 1 con terminación anticipada.

Lesiones Personales

Las lesiones personales en Antio-
quia son una manifestación observable
de la cultura de la ilegalidad que se ha
arraigado en parte de la sociedad, nor-
malizando la violencia como una forma
legítima de resolver conflictos (Quintero
Cordero & Molina Orjuela, 2013). Según
datos proporcionados por el SIEDCO
(2023), en el año 2022 se denunciaron
10,966 casos de lesiones personales en
el departamento. De este total, el 55%
de las víctimas fueron de sexo masculi-
no y el 45% de sexo femenino. Además,
la mayoría de los incidentes involucraron
el uso de objetos contundentes (59%), ar-
mas blancas (12%), y en un 25% de los
casos no se utilizaron armas.

Gráfico 18. Antioquia: tasa de lesiones personales, pre-post pandemia.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos del SIEDCO y del DANE

Aunque en la mayoría de las subregio-
nes ha disminuido la tasa de denuncia-
s por lesiones personales (véase el Gráfico
18), es importante tener en cuenta que es-
tas cifras son solo una aproximación de
la verdadera magnitud de los casos que
ocurrieron en el departamento. Los con-
flictos entre vecinos y familiares también
suelen ser mediados por grupos armados
ilegales, quienes actúan como interme-
diarios e imponen sanciones a petición
de la propia comunidad (Blattman et al.,
2021; SISC, 2019).

Ante este panorama, es necesario abordar
el problema de la violencia interpersonal
de manera integral, implementando estra-
teguas que vayan más allá de la represión y
se enfoquen en la prevención, la promoción
de valores de respeto y convivencia pacífi-
ca, y el fortalecimiento de la confianza en
las instituciones encargadas de impartir
justicia (RCCV, 2021). Además de garantizar
justicia para las víctimas, se deben tomar
medidas para abordar las causas subya-
centes de la violencia y fomentar un cam-
bio cultural en el que se rechace la violen-
cia como medio de resolución de conflictos.

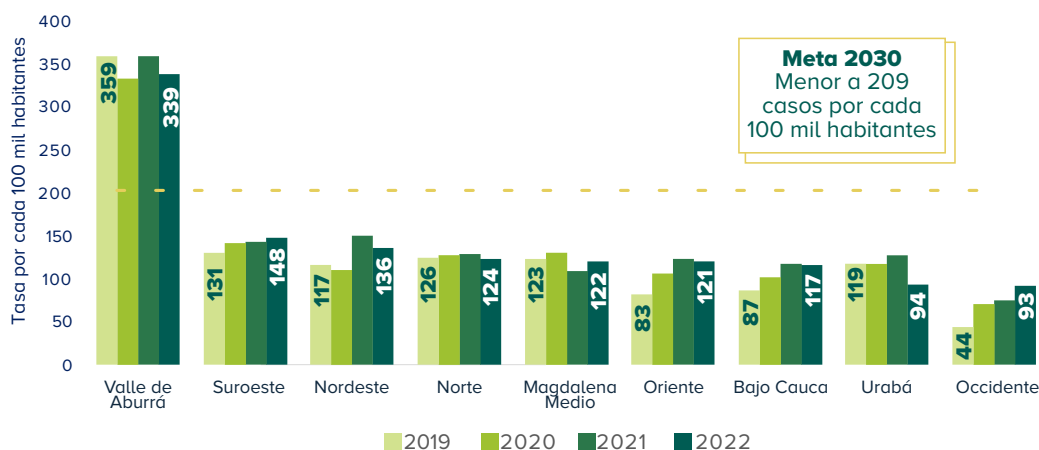
Violencia Intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es un fenómeno grave y doloroso que acontece en el seno del hogar y se manifiesta en diversas formas, tales como el abuso físico, sexual o emocional, la negligencia, el maltrato infantil y la violencia de pareja. Esta problemática afecta a personas de todas las edades, géneros y estratos sociales, pero con mayor frecuencia, las víctimas suelen ser mujeres y niños/as (INMLCF, 2021). Este tipo de violencia va más allá de los confines de los hogares y representa un problema que afecta a toda la sociedad. Existe una alta probabilidad de que los niños que crecen en ambientes violentos repliquen estos patrones de violencia en su vida adulta, perpetuando así el ciclo de violencia de generación en generación (Guerra et al., 2003). Como resultado, la violencia intra-

familiar termina debilitando la cohesión social y contribuye a la generación de un ambiente de inseguridad y desconfianza, especialmente entre las mujeres (Avdibegovic et al., 2017; Lindhorst et al., 2007).

Según datos recopilados por el SIEDCO (2023), en Antioquia se denunciaron 17.093 casos de violencia intrafamiliar en 2022, siendo el segundo departamento con más denuncias de este delito, después de Bogotá con 45.059. De los casos denunciados en Antioquia durante 2022, el 82% ocurrió en el Valle de Aburrá. Esta subregión se destaca no solo por tener la mayor cantidad de denuncias, sino también por presentar la tasa más alta de denuncias por violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes, como se observa en el Gráfico 19.

Gráfico 19. Subregiones: Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes, 2019 - 2022



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos del SIEDCO y del DANE.

Este gráfico también indica que el Valle de Aburrá aún no alcanza la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 209 casos de violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes (Gobernación de Antioquia, 2021g). Si

bien las demás subregiones presentan menores tasas de violencia intrafamiliar, en algunas se observa una tendencia creciente desde el inicio del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Esta situación se ha evidenciado en subregio-

nes como Suroeste, Oriente, Bajo Cauca y Occidente, donde se ha registrado un incremento preocupante en los casos de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con las cifras del SIEDCO (2023), el 79% de las personas que denunciaron este delito durante 2022 en Antioquia fueron mujeres. Además, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF (2023), 3 de cada 10 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar durante 2022 fueron menores de edad.

Es importante reconocer que los casos denunciados de violencia intrafamiliar en Antioquia no son la totalidad de situaciones de violencia de este tipo que realmente ocurre en el departamento. La existencia de una brecha entre casos y denuncias es explicada por múltiples causas, entre las cuales se encuentran la falta de confianza y la percepción de ineficiencia del sistema de Justicia por parte de la ciudadanía (RCCV, 2021). Como lo señala la Procuraduría General de la Nación (2021), “la justicia familiar, desde el rol que le corresponde a las comisarías de familia, se encuentra aún lejos de cumplir las premisas de eficiencia y de atención en condiciones de dignidad, así como del ideal de una pronta y cumplida justicia” (Procuraduría General de la Nación, 2021, p.5). En este sentido, resulta imperativo continuar avanzando en el fortalecimiento de las comisarías de fa-

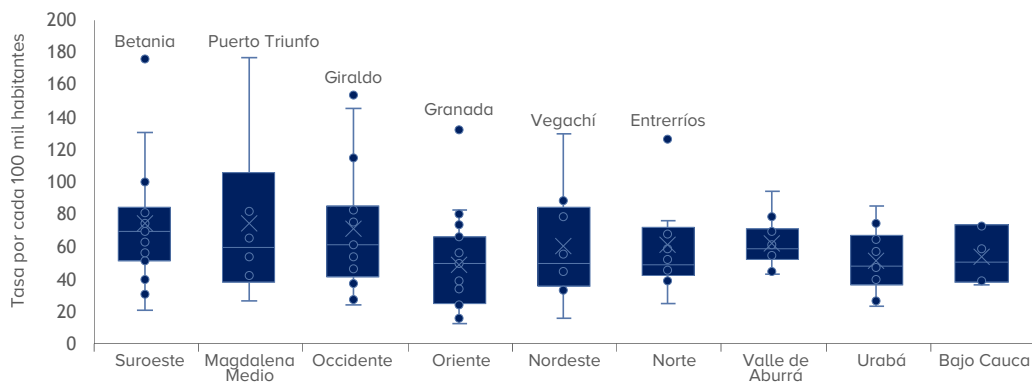
milia y de todo el sistema judicial, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna, aumentar la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y disminuir la inclinación de la ciudadanía a recurrir a servicios de seguridad y justicia criminal.

Delitos Sexuales

En relación estrecha con los casos de violencia intrafamiliar, los delitos sexuales constituyen una preocupante realidad en Antioquia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2023), el 72% de los casos atendidos en 2022 por presuntos delitos sexuales tuvieron lugar en el hogar. Además, en un 42% de los casos, el presunto agresor fue identificado como un familiar, mientras que en un 9% se señaló a la pareja o expareja (INMLCF, 2023).

Estas cifras alarmantes muestran que el hogar, que debería ser un lugar seguro, se convierte en un escenario de abuso y violencia sexual para muchas víctimas, en su mayoría mujeres y menores de edad. De las 4.785 denuncias interpuestas durante 2022 en Antioquia, las principales víctimas fueron niños (6%), niñas (28%), mujeres adolescentes (26%) y mujeres adultas (32%). Según datos del SIEDCO (2023), entre 2019 y 2022, cada año se registraron más de 4.500 denuncias por delitos sexuales en Antioquia.

Gráfico 20. Subregiones: tasa de denuncias de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes, 2022.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos del SIEDCO y del DANE.

Durante 2022, el 68% de los delitos sexuales denunciados en Antioquia ocurrieron en el Valle de Aburrá. Sin embargo, al examinar la tasa por cada 100 mil habitantes, se observa que, si bien cualquier caso es inaceptable, hubo algunos municipios que presentaron una cantidad de casos atípicamente alta en relación con el tamaño de su población (véase el Gráfico 20). Estos municipios fueron: Betania, con una tasa de 177 casos por cada 100 mil habitantes; Puerto Triunfo, también con una tasa de 177; Valparaíso, con 176; Giraldo, con 154; Dabeiba, con 145; Granada, con 132; La Pintada y Vegachí, ambos con 130; Belmira, con 127; Entrerríos, con 126; Liborina, con 115, entre otros.

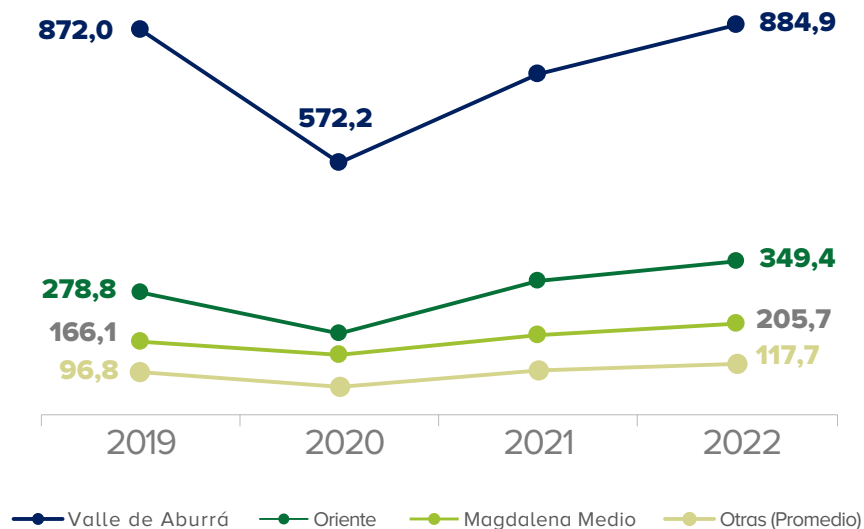
Aunque en 2022 la seccional de Fiscalía de Antioquia logró cifras históricas en el esclarecimiento de distintos hechos delictivos, entre estos el esclarecimiento del 61% de los delitos sexuales y el 76% de los casos de violencia intrafamiliar (Fiscalía General de la Nación, 2023b), es necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención, atención y sanción de estos delitos.

Delitos Contra El Patrimonio

El hurto a personas es el delito contra el patrimonio más denunciado en Antioquia. En el año 2022, se registraron 41,281 denuncias por este delito en el departamento, lo que representa un aumento del 7.2% en comparación con las 38,512 denuncias reportadas en 2019 (SIEDCO, 2023). Aunque la meta establecida en la agenda ODS para Antioquia 2030 es de 10.4 hurtos por cada 100,000 habitantes (Gobernación de Antioquia, 2021g), en 2022 el departamento tuvo una tasa de 608.2 (58 veces superior a la meta).

Valle de Aburrá y Oriente han sido las subregiones con las tasas de denuncias por hurto a personas más altas del departamento. Aunque en menor magnitud, en las demás subregiones también se reportaron tasas de denuncias por hurto a personas superiores al objetivo establecido en la agenda ODS (ver Gráfico 21).

Gráfico 21. Subregiones: Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes, 2019 – 2022.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos del SIEDCO

Durante 2022, el 56% de los hurtos a personas se cometieron sin el uso de armas, lo que refleja la prevalencia de modalidades delictivas basadas en el aprovechamiento del descuido, el cosquilleo, el engaño y la intimidación verbal (SIEDCO, 2023). Por otro lado, resulta alarmante que en el 25% de los casos se utilizó la intimidación con armas de fuego como método para despojar a las víctimas de sus pertenencias. Estas cifras se corresponden con los hallazgos de la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia (2021c) que indican que en el departamento 1 de cada 10 personas consideran que los atracos callejeros son uno de los problemas más graves en relación con la inseguridad que se presenta en su barrio, corregimiento o vereda.

Otro delito de alto impacto que atenta contra el patrimonio económico de las personas en Antioquia es la extorsión. Durante el año 2022, el departamento registró la mayor cantidad de denuncias

por extorsión en comparación con otros departamentos de Colombia, con un total de 1,307 denuncias (SIEDCO, 2023). En Antioquia la cantidad de denuncias por extorsión se mantuvo relativamente estable durante los últimos cuatro años, con una ligera disminución del 5.6% entre 2019 y 2022.

A pesar de que una parte importante de los casos de extorsión no son denunciados por temor a represalias (CIEF, 2020), en lo transcurrido de 2023 se ha observado un incremento del 104% en las denuncias por este delito en comparación con 2022 (SIEDCO, 2023). Mientras que entre enero y mayo de 2022 se reportaron 457 casos de extorsión, en el mismo periodo de 2023 se denunciaron 933 casos. Al analizar la distribución geográfica de este incremento, se observa que los municipios con el mayor aumento en este delito se encuentran en el Valle de Aburrá, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Municipios de Antioquia con el mayor número de denuncias por extorsión, 2022 – 2023.

	2022	2023	Incremento	
	Enero - Mayo	Enero - Mayo	Absoluto	Relativo
Medellín	126	492	+366	290%
Bello	59	109	+50	85%
Itagüí	37	49	+12	32%
Envigado	13	37	+24	185%
Rionegro	28	12	-16	-57%
Copacabana	13	14	+1	8%
Sabaneta	8	22	+14	175%
Barbosa	16	13	-3	-19%
Santa Rosa de Osos	15	10	-5	-33%
Caldas	1	17	+16	1600%

Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos del SIEDCO

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el SIEDCO (2023), una de cada dos extorsiones denunciadas en Antioquia durante 2023 se llevó a cabo mediante llamadas telefónicas o a través de redes sociales. Esta tendencia refuerza la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y combate de la extorsión en los entornos digitales, así como de promover la concientización ciudadana sobre los riesgos asociados con estas prácticas delictivas.

Víctimas del Conflicto Armado

Durante décadas, Antioquia ha enfrentado confrontaciones armadas y episodios de violencia que le han convertido en el departamento con la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas-RUV, 1.895.790 personas fueron victimizadas en el departamento entre 1985 y el 31 de mayo de 2023 (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2023). Se tiene registro de que, a esta

fecha de corte, 1.550.695 víctimas del conflicto armado vivían en Antioquia, lo que equivale al 22.6% de la población del departamento.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ (2021), el conflicto armado en Antioquia se concentra en dos focos principales. El primero abarca las subregiones del Norte y el Bajo Cauca antioqueño, así como el sur de los departamentos de Córdoba y Bolívar. El segundo se encuentra en el Urabá antioqueño y chocoano, así como en el pacífico chocoano. En estas áreas, grupos ilegales como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, los Caparros, el ELN y grupos post FARC-EP disputan el control territorial.

El Bajo Cauca, el Norte y el Urabá antioqueño son focos del conflicto debido a su ubicación estratégica para las rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales como el oro y la madera (Fundación Ideas para la Paz, 2014). Estas

subregiones no solo facilitan la conexión entre el interior del departamento, e incluso del país, y el mar Caribe, sino que también albergan el enclave Valdivia-Tarazá-Cáceres¹, que es el mayor centro de cultivos de coca en Antioquia (UNODC, 2022). Además, solo el Bajo Cauca cuenta con casi la mitad de la producción de oro de Antioquia y una cuarta parte de la producción nacional (UPME, 2023).

Estos factores son explotados por grupos ilegales que, además, sacan provecho de la condición de vulnerabilidad socioeconómica de la población de estas subregiones (consultar Capítulo de Pobreza). Para muchas personas en el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, el cultivo de coca y la minería de oro se presentan como una forma de subsistencia para cubrir sus necesidades básicas (Santisteban, 2020; UNODC, 2022). Sin embargo, los grupos ilegales no solo realizan una extracción masiva de recursos minerales, lo que resulta en una deforestación sin precedentes en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño (International Crisis Group, 2021), sino que también imponen cuotas a la población civil por el uso de maquinaria para la extracción de minerales, así como por la cantidad de mineral extraído (OEA, 2022).

Las afectaciones sobre la población civil van mucho más allá del pago de extorsiones o vacunas. Las confrontaciones que se producen entre actores armados por el control de las rentas ilegales han generado que un promedio de 24.000 personas fueran víctimas de desplazamiento forzado cada año en Antioquia entre 2016 y 2022 (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2023).

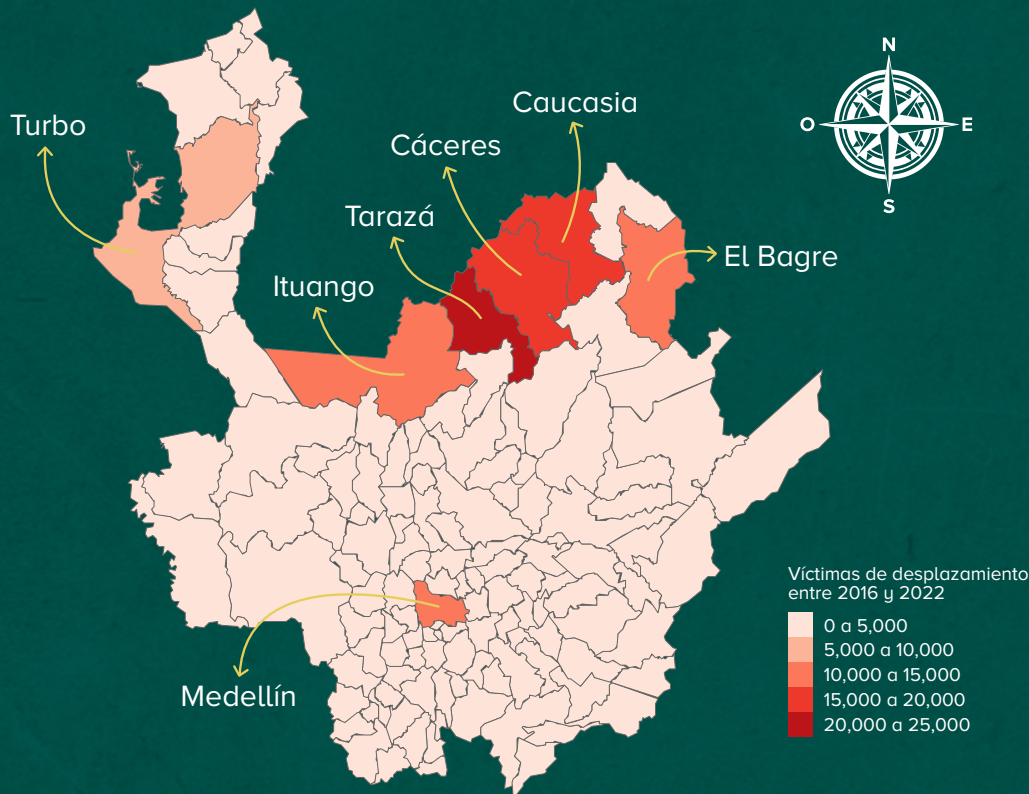
1 El enclave Valdivia-Tarazá-Cáceres aporta el 23% del área sembrada con coca de la región Central-Sur de Bolívar (UNODC, 2021)



Como se observa en el Gráfico 22, la mayoría de estos desplazamientos forzados ocurrieron en municipios del Bajo Cauca, entre estos, Tarazá, Cáceres, Caucasia y El Bagre, así como en Ituango (Norte), Tur-

bo (Urabá) y Medellín (Valle de Aburrá). De acuerdo con Indepaz (2023), Ituango, Tarazá y Cáceres se encuentran entre los 10 municipios con el mayor índice de desplazamientos forzados de Colombia.

Gráfico 22. Municipios más afectados por desplazamiento forzado, 2016 - 2022



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos de la Unidad para las Víctimas

De acuerdo con cifras de la Unidad para las Víctimas (2023), en Antioquia el desplazamiento forzado ha afectado directa o indirectamente a 1.372.519 personas, lo que equivale a aproximadamente 2 de cada 10 habitantes del departamento. Entre las ciudades de Antioquia, Medellín ha sido la mayor receptora de las víctimas de este fenómeno, albergando a 354.872 víctimas de desplazamiento forzado, lo que representa el 13.7% de

su población. Esta proporción podría aumentar si continúan los desplazamientos forzados, una problemática que se agudizó nuevamente desde 2018.

Esta situación plantea desafíos complejos para las principales ciudades receptoras, como Medellín, Bello y otros municipios del Valle de Aburrá. Es fundamental que se tomen acciones y se formulen políticas públicas que provean la oferta

de servicios necesarios para abordar el desplazamiento forzado. Se requiere una mayor disponibilidad de servicios públicos, como atención médica, educación y acceso a la justicia, así como oportunidades laborales que faciliten la integración y la movilidad social (Ruiz, 2011).

La presencia de estructuras criminales no se limita únicamente al Bajo Cauca, Norte y Urabá antioqueño, sino que su influen-

cia se extiende a lo largo de todo el territorio antioqueño (Gobernación de Antioquia, 2021b). En la tabla 2 se observa como los grupos armados ejercen control sobre la población civil a través del miedo y la perpetración de distintas formas de victimización en todas las subregiones. Entre estas se reportan amenazas, confinamientos, homicidios, vinculación de menores a actividades relacionadas con grupos armados, entre otras.

Tabla 2. Antioquia: hechos victimizantes reportados entre 2016 y 2022

	Bajo Cauca	Urabá	Norte	Valle de Aburrá
Desplazamiento Forzado	73.753	21.869	25.346	16.863
Amenazas	1.062	6.333	6.734	3.600
Confinamiento	203	5.052	151	0
Homicidio	1.304	417	829	133
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	864	921	421	79
Acto Terrorista/ Atentados/ Combates/ Enfrentamientos/ Hostigamientos	238	50	114	29
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados	85	9	32	5
Otros hechos victimizantes	494	195	253	101

	Occidente	Nordeste	Suroeste	Magdalena Medio	Oriente
Desplazamiento Forzado	6.951	8.260	5.398	2.649	2.043
Amenazas	2.599	2.714	1.877	852	642
Confinamiento	1.993	0	109	0	0
Homicidio	257	448	291	58	93
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	186	123	67	35	57
Acto Terrorista/ Atentados/ Combates/ Enfrentamientos/ Hostigamientos	34	52	27	9	6
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados	9	29	5	0	0
Otros hechos victimizantes ²	90	129	56	10	43

Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

En cuanto a los índices de violencia, Antioquia destaca como uno de los principales escenarios en Colombia de masacres y asesinatos de líderes/as sociales y excombatientes. De acuerdo con información su-

ministrada por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, entre 2016 y 2022, Antioquia fue el departamento con la mayor cantidad de masacres, con un total de 83.

² Otros hechos Victimizantes: lesiones personales; delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado; desaparición forzada; minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado; secuestro; abandono o despojo forzado de tierras; tortura.

Además, desde la firma del acuerdo de paz, 176 líderes sociales fueron asesinados en Antioquia, ubicándolo como el segundo departamento con mayor número de líderes sociales asesinados, después de Cauca. Es importante destacar que en Tarazá, Norte de Antioquia, se reportaron 29 líderes sociales asesinados, convirtiéndolo en el quinto municipio con más casos en todo el país. Por otro lado, Antioquia también se encuentra entre los tres departamentos con mayor número de firmantes del acuerdo de paz asesinados, con un total de 38 excombatientes asesinados hasta la fecha. De estos, 12 ocurrieron en Ituango, Norte de Antioquia, situando a este municipio como el segundo con más casos a nivel nacional (INDEPAZ, 2023).

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para poner fin al conflicto armado y avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz, las condiciones de seguridad en las subregiones de Antioquia evidencian la necesidad de redoblar los esfuerzos para garantizar la reparación integral de las víctimas y construir una paz sostenible en el departamento. Para lograrlo, es imperativo que garantice el cese de hostilidades contra la población civil. Esta medida es fundamental para generar un ambiente seguro que propicie la reconciliación y permita avanzar hacia una sociedad justa y en paz.

Avances

- Desde el año 2019, Antioquia ha experimentado una tendencia decreciente en los casos de homicidio, logrando en el 2022 la tasa más baja de homicidios por cada 100.000 habitantes en los últimos 43 años, así como la tasa más baja de homicidios de mujeres en los últimos 40 años.

Retos

- La violencia de género continúa siendo un problema de gran relevancia en el departamento. Los feminicidios, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales siguen afectando significativamente a mujeres y menores de edad, lo que subraya la necesidad apremiante de implementar medidas integrales de prevención y atención para abordar esta situación.

La presencia de grupos armados ilegales representa un desafío continuo para la seguridad en Antioquia. La influencia de estos grupos se extiende a todas las subregiones, perpetuando un clima de violencia y temor entre la población civil.

- La persistencia del conflicto armado ha ocasionado un elevado número de desplazamientos forzados, planteando grandes desafíos para la provisión de servicios y oportunidades a las víctimas que buscan rehacer sus vidas.
- El incremento en las denuncias por extorsión y hurtos a persona resalta la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y combate de estos delitos.
- Es de vital importancia seguir desarrollando e implementando programas y estrategias orientadas a abordar las causas fundamentales de la violencia y el crimen. En este sentido, es crucial continuar invirtiendo en la prevención del delito y la promoción de valores que fomenten la convivencia pacífica en comunidad.

INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE ANTIOQUIA

LÍNEA BASE

ANTIOQUIA 
cómo vamos
LAB

Fundación corona

comfama

Comfenalco
Antioquia

GRUPO ARGOS
Fundación

uniban

FUNDACION GRUPO
bios.

Mineros
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
EAFIT®
Vigilada Mineducación

UDB

Universidad
de Medellín
Ciencia y Libertad

UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

PRISAMEDIA

PROANTIOQUIA